

EJECUTORIA de la Suprema Corte de Justicia.

México, Marzo 3 de 1873.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Hidalgo, por el Lic. D. José M^{te} Carvajal, contra la legislatura del Estado, que dispuso que clausuradas las sesiones de ella no disfrutase el quejoso de las dietas que le correspondieran como diputado, y considerando: que el Lic. Carvajal admitió la próroga de la licencia que le fué concedida á petición suya por mas tiempo del por que lo pidió, que aunque indicó en lo particular que estaba pronto á continuar en el desempeño de su encargo, no se presentó oficialmente á continuar en él: que la disposicion relativa á que los diputados que hubiesen estado en ejercicio de sus funciones hasta la clausura de las sesiones fuesen quienes percibiesen dietas, está de acuerdo con lo que disponen los arts. 13 de la Constitucion federal y 117 de la del Estado de Hidalgo; y que por lo mismo la legislatura del de Hidalgo obró dentro de la órbita de sus facultades al dar aquella disposicion, se decreta: que se revoca la sentencia pronunciada respecto de este juicio el 30 de Diciembre último por el juez de Distrito de Hidalgo, que ampara y protege al C. José M^{te} Carvajal, contra el acuerdo de la legislatura del Estado, en virtud de que se le priva de las dietas que le corresponden desde 27 de Setiembre último, como diputado por el Distrito de Acaxochitlan, y se declara: que la Justicia de la Union no ampara al referido C. Lic. Carvajal, contra el mencionado acuerdo.

Devuélvanse sus actuaciones al Juzgado de que proceden con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así lo decretaron por unanimidad de votos los ciudadanos Presidente y Minis-

tros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos mexicanos y firmaron.—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*Pedro Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*Luis Velazquez.*—*M. Zavala.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Son copias que certifico. México, Marzo 24 de 1873.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor

AMPARO interpuesto ante el Juzgado de Distrito del Estado de México, por los CC. José de los Santos y José Alberto, contra el C. Alcalde municipal de Zinacantepec, por violacion de garantías.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. juez de Distrito:

El Promotor fiscal, dice: que los CC. José de los Santos y José Alberto, con fecha 18 del mes de Enero último, vinieron á quejarse á la autoridad Federal, contra el C. Alcalde municipal de Zinacantepec, porque los obligó á trabajar en el camino que conduce de esta capital al mineral de Sultepec, sin remuneracion de ninguna especie.

Cuando la espresada autoridad produjo el informe que la ley previene, no negó el hecho de que se quejaron los peticionarios, aunque no contestó directamente por lo relativo á los mismos. Dijo que conforme á la prevencion de la Gefatura política del Distrito, habia dispuesto una circular dirigida á los pueblos de la municipalidad, para que saliesen á trabajar al camino de Sultepec, ordenando: que del pueblo de San Cristóbal fuesen tres hombres diarios.

Los quejosos son vecinos de este pueblo, y en obediencia de la referida circular, que tiene fecha 10 de Enero

próximo pasado, fueron al trabajo de la compostura del camino, que ya se mencionó.

Así aparece justificado en los autos, de manera que no puede ponerse en duda que la autoridad de Zinacantepec, con desprecio del art. 5º de la Constitución General del país, ha obligado á los postulantes á prestar un trabajo personal gratuito.

No puede ni debe tomarse en consideración para excusar al C. Alcalde de Zinacantepec, de la responsabilidad que ha contraído respecto de José de los Santos y José Alberto, obligándolos á prestar un trabajo personal sin remuneración, ni la prevención que haya recibido de la Jefatura política del Distrito, ni tampoco el precepto si existe en las ordenanzas municipales de cuyo Código se hace referencia en la comunicación de fojas 7 de estos autos.

La ley Suprema de la nación es la Carta Fundamental de la República, la que debe de respetarse antes de cualquiera otra ley, aunque emane del Congreso de la Unión, y con mas razón cuando se trate de leyes particulares de los Estados; cuyas autoridades tienen el indeclinable deber de cuidar de la estricta observancia de los preceptos constitucionales.

El que suscribe, en vista de las pruebas que articularon los peticionarios, las cuales consisten en la testimonial de tres ciudadanos que espresan de un modo claro que el C. juez Auxiliar del pueblo de San Cristóbal, por mandato del C. Alcalde municipal de Zinacantepec, obligó á José de los Santos y á José Alberto, á ir á trabajar al camino de Sultepec, cuyo hecho aparece ademas adminiculado con el dicho del mismo juez Auxiliar del espresado pueblo de San Cristóbal, según se ve á fojas 10 vuelta y 11 de los autos, cree que el juicio de amparo que han seguido los

referidos José de los Santos y socio, ha procedido y procede; y cuya opinión no pudo emitir, cuando contestó el traslado de tres días, porque en aquella fecha, los hechos que servían de fundamento á la queja, aun no aparecían justificados.

En virtud, pues, de lo espuesto, el que habla, con apoyo del art. 5º de la Constitución Federal y de la ley de 20 de Enero de 1869, pide al Juzgado se sirva declarar: que la Justicia de la Unión ampara y protege á los CC. José de los Santos y José Alberto, vecinos de la municipalidad de Zinacantepec, en el pueblo de San Cristóbal, contra la determinación del C. Alcalde, que los ha obligado á trabajar en la compostura del camino que conduce de esta ciudad al mineral de Sultepec, sin remuneración de ninguna clase.

Toluca, Febrero 15 de 1873.—*Ceballos.*

Es copia de su original que certifico.
Toluca, Febrero 19 de 1873.—*Licenciado Francisco del Valle, secretario.*

SENTENCIA del ciudadano juez de Distrito.

Toluca, Febrero 18 de 1873.—Visto el recurso de protección y amparo intentado por José de los Santos y José Alberto, de la municipalidad de Zinacantepec, contra la providencia dictada por el C. Alcalde municipal de dicho pueblo y sus anexos, por la que los obligó á prestar servicios contra su voluntad y sin retribución en la compostura de caminos, con la que, en concepto de los quejosos, ha violado la garantía constitucional concedida por el art. 5º de la Carta Fundamental de la República. Vistos así mismo el informe producido por el Alcalde, C. José María Baez, y el pedimento fiscal del C. Promotor, y vistas por último, las pruebas

aducidas por los interesados. Teniendo en consideracion que estos, tanto con el informe citado, como con las declaraciones de los testigos que presentaron, y comunicaciones exhibidas y cotejadas, probaron plena y suficientemente que fueron obligados á prestar trabajos personales sin la justa retribucion; contra lo preceptuado por el art. 5º antes citado, en cuyo caso se vulneró la garantía individual que él otorga, lo alegado por las partes y todo lo demas que ver y considerar convino; y sin olvidar que el art. 126 de la ley Suprema dispone que los jueces se arreglen á ella, á pesar de las disposiciones en contrario que pueden haber en las Constituciones ó leyes de los Estados, porque la Constitucion es la ley Suprema. La justicia Federal en el Estado de México, apoyada por la de la Union, y con fundamento de la ley de 20 de Enero de 1869, declara: que debia amparar y desde luego ampara y protege á los CC. José de los Santos y José Alberto, contra la providencia del C. Alcalde municipal de Zinacantepec, por la que sin retribucion los obligó á prestar trabajos personales. Hágase saber: espídanse las copias de estilo para la publicacion de este auto, y fecho, elévese este espediente á la Suprema Corte de Justicia para su revision.

El C. Lic. Ramon Ortigosa, juez de Distrito en el Estado de México, definitivamente juzgando en 1ª instancia, así lo decretó y firmó. Doy fé.—*Ramon Ortigosa.—Francisco del Valle*

Es copia de la original que certifico. Toluca, Febrero 19 de 1873. — *Lic. Francisco del Valle*, secretario.

EJECUTORIA de la Suprema Corte de Justicia.

México, Marzo 4 de 1873.—Visto el recurso de amparo que en 18 de Enero de 1873.—Tomo III.—Parte II.

ro del corriente año, promovieron en la ciudad de Toluca, ante el juez del Distrito del Estado de México, José de los Santos y José Alberto, jornaleros, contra una providencia del Alcalde municipal de Zinacantepec, por la cual se obliga á los promoventes á trabajar sin retribucion en el camino de aquella ciudad al mineral de Sultepec, violando en sus personas la garantía que otorga el art. 5º de la Constitucion Federal. Visto el informe de la autoridad presentada como responsable del acto reclamado; las demas constancias de autos y atenta la sentencia del juez de Distrito, en la que, teniendo en consideracion la verdad de la queja segun los autos, y el derecho que asiste á los quejosos para deducirla segun las leyes, concede el amparo pedido. Por los fundamentos del juez, y con apoyo de la ley de 20 de Enero de 1869, se resuelve lo siguiente:

Se confirma la sentencia del juez de Distrito del Estado de México, pronunciada en Toluca á 18 de Febrero próximo pasado, en la que declara: que la Justicia de la Union ampara y protege á los CC. José de los Santos y José Alberto, contra la providencia del C. Alcalde municipal de Zinacantepec, por la que sin retribucion les obligó á prestar trabajos personales.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de Distrito que las elevó en revision, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados-Unidos mexicanos y firmaron.—*Pedro Ogazon.—Juan J. de la Garza.—José Arteaga.—Pedro Ordaz.—Ignacio Ramirez.—J. M. del Castillo Velasco.—M. Anza.—S. Guzman.*

*M. Zavala.—José García Ramírez.—
Luis María Aguilar, secretario.*

Es copia que certifico. México, Marzo 12 de 1873.—*Lic. Enrique Landa,*
oficial mayor.

AMPARO promovido ante el Juzgado de Distrito de Oaxaca, por Feliciano García y otros, contra una providencia del C. Gobernador del Estado, por violación de garantías.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. juez de Distrito:

El Promotor Fiscal, dice: que Enlorgio Jimenez y Zeferino Bazan, vecinos de Tepelmeme, perteneciente al Distrito de Coixtlahuaca, han solicitado el amparo de la Justicia Federal contra una resolución del gobierno del Estado, relativa á los terrenos de Tequistepec y Tepelmeme, dictada el día siete de Agosto de mil ochocientos setenta y uno, para fijar los límites de ambas poblaciones.

Los quejosos fundaron su derecho en la fracción 1.^a de la ley de 20 de Enero de 1869, asegurando que la referida resolución ha violado en sus personas las garantías que otorgan los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, privándoles de la propiedad y posesión sobre ciertos terrenos que refieren haberles sido adjudicados.

El Juzgado del digno cargo de vd. procedió en cumplimiento de la ley á poder informe á la autoridad responsable; y esta refiere que la providencia de que se trata fué una medida provisional dirigida á conservar el sosiego de los pueblos, ó medida precautoria que dejó salvos á los interesados todos sus derechos, y abiertos los tribunales de la justicia para que ocurriesen á ellos en demanda de sus respectivas facultades.

Se rindió prueba por los interesados, pero como demostraré despues, toda ella

es inútil para justificar la violación personal de las garantías en que se apoyan sus pretensiones.

Por lo demas, en concepto del que suscribe, el amparo de ninguna manera es de concederse, y descansando en el buen juicio ó ilustración del Juzgado, cree el Promotor que no otorgará tal amparo, el cual solicitan los promoventes guiados muy estraviadamente.

Esta verdad se hará palpable sacando la cuestión de ese cúmulo de hechos y pretendidas pruebas que la confunden fatigando la inteligencia del que la examina.

¿Se alega que la resolución administrativa de siete de Agosto violó las garantías de los artículos 14 y 16 constitucionales? Pues no hay mas que ver el texto de estos artículos y la providencia reclamada, para estar en aptitud de saber si en efecto hubo ó no la violación que se alega. Veámoslo.

El art. 14 en la parte que pudiera ser aplicable, dice así: "Nadie puede ser juzgado ni sentenciado sino por leyes dadas con anterioridad al hecho y esactamente aplicadas á él, por el Tribunal que previamente haya establecido la ley."

Ya se ve que este artículo trata de los que son juzgados y sentenciados por leyes anteriores al hecho, inesactamente aplicadas, ó aplicadas por un Tribunal que no estuviere previamente establecido. Si, pues, ni Bazan ni Jimenez han sido juzgados ni sentenciados en la resolución de siete de Agosto, no pueden alegar que lo han sido por leyes anteriores, mal aplicadas, etc.; y el caso esta manifestamente fuera de los términos de esa disposición.

Pasemos al art. 16, en el cual se previene que: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles y posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento." Pues bien, la termina-